



Auto interlocutorio	313
Radicado	052663103001-2020-00152-00
Proceso	Ejecutivo
Demandante (s)	Sierra Alliance S.A.S.
Demandado (s)	Diana Patricia Atehortúa Peñate
Asunto	Libra mandamiento de pago

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE
ENVIGADO

Treinta de septiembre del año dos mil veinte

Mediante la presente demanda la sociedad **Sierra Alliance S.A.S.** pretende que se libre mandamiento de pago en su favor y en contra de **Diana Patricia Atehortúa Peñate**, con base en tres (3) facturas de venta.

C O N S I D E R A C I O N E S:

1. Las facturas de venta, para que constituyan títulos valores, deben reunir, entre otros los siguientes requisitos:

1.1. Los enunciados en el artículo 621 del C. de Co.:

- La mención del derecho que se incorpora.
- La firma del creador.

1.2 Los indicados en el artículo 3º de la Ley 1231 de 2008:

- Fecha de vencimiento. Si no se expresa nada en la factura, será pagadera 30 después de su emisión.
- Fecha de recibo de la factura con indicación del nombre o identificación o firma de quien recibe.

2. En este caso, del estudio de los documentos presentados para el recaudo, se desprende que no reúnen todos los requisitos mencionados, pues carecen de la firma del creador, esto de la sociedad demandante, como vendedora de las mercaderías.

Al respecto, la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, ha dicho: “... De las reglas que acaban de citarse [hace relación al artículo 621.2º del Código de Comercio y al artículo 1º de la Ley 1231 de 2008, que modificó el artículo 772 del Código de Comercio], queda claro para el Tribunal, que la factura de venta, por lo menos, para que sea título valor, necesariamente debe ir suscrita o firmada por su creador, esto es, por el vendedor de las mercancías, sin que la firma del comprador sea una exigencia esencial, pues ella está suplida con la aceptación, misma que puede hacerse en documento aparte, o puede ser tácita, como lo admite el artículo 21 de la ley 1231 de 2008, que modificó el 773 del Código de Comercio”¹.

3. No obstante lo anterior, el artículo 620 del mismo código dispone que “[l]os documentos y los actos a que se refiere este Título sólo producirán los efectos en él previstos cuando contengan las menciones y llenen los requisitos que la ley señale, salvo que ella los presuma. *La omisión de tales menciones y requisitos no afecta el negocio jurídico que dio origen al documento o al acto*” (negrilla fuera del texto).

En ese sentido, si bien es cierto que un título valor requiere del lleno de los presupuestos normativos para ser considerado un instrumento negocial en los términos del estatuto mercantil, también lo es que si falta

¹ Auto del 15 de julio de 2013, Ref.:052663103001-2012-00406-01. M. Dr. Julián Valencia Castaño.

algún requisito, el negocio jurídico que dio nacimiento al mismo persiste, y el documento que lo contenga, puede servirle al acreedor para “demandar[...] ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en [él], [siempre] que provenga[n] del deudor o de su causante y constituya[n] plena prueba contra él...” (art. 422 del Código General del Proceso).

4. En el caso *sub judice*, se advierte que los documentos aportados para la ejecución, dan cuenta de la venta a crédito –ciento veinte (120) días - de bienes por parte de la sociedad demandante a la señora Atehortúa Peñate, individualizando las mercancías por su precio unitario y valor total, las cuales aparecen firmadas por esta última, de las que se desprenden obligaciones claras, expresas y exigibles. El requisito establecido en el artículo 422 *ídem*, relativo a que los documentos “constituyan plena prueba” contra el deudor -que está estrechamente ligado con la autenticidad-, también se encuentra reunido, en la medida en que el artículo 244 *ib* “...*presume auténticos todos los documentos **que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo***”. Por este aspecto, hoy por hoy, tanto los títulos valores como los documentos que prestan mérito de ejecución, están a la par: ambos gozan de presunción de autenticidad.

Tiene dicho la doctrina:

“Los documentos que no tengan las menciones y requisitos necesarios no pueden hacerse valer con la acción cambiaria y el artículo 784, numeral 4º, da excepción por esta causa en contra de cualquier tenedor. Esta es, ni más ni menos, inexistencia de la obligación. El interesado, entonces, **tiene las acciones comunes por el negocio fundamental o subyacente, en las cuales el documento puede jugar un papel probatorio, no el cambiario**”² (resaltado intencional).

² Sanín Echeverri, Eugenio. *Ídem*, pág. 73.

De este modo, entonces, si el documento invocado como título valor no contiene “las menciones” y “requisitos” que la ley exija para que sea considerado como tal, es evidente que el mismo es ineficaz para gozar de las prerrogativas propias del denominado derecho cambiario, pero de ello no deviene, inexorablemente, que aquél no pueda “jugar un papel probatorio” sirviendo como soporte para una ejecución, si reúne las exigencias de que trata el art. 422, ya analizadas.

Corolario de lo expresado es, que si el Juez, *ab initio*, descalifica la condición de título valor del documento aducido, ello no lo releva de verificar si el mismo presta mérito de ejecución en los términos del tantas veces mencionado artículo 422³. No en vano el art. 430 *ibídem*, prescribe que “[p]resentada la demanda *acompañada de documento que preste mérito ejecutivo*,⁴ el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, *o en la que aquél considere legal...*” (subraya fuera del texto original).

³ “Descartado el que los documentos son títulos-valores, el examen ahora ha de orientarse a si, en cambio, cumplen a cabalidad las exigencias establecidas en el artículo 488 del Código de enjuiciamiento civil y bajo esas características determinar si [e]s o no procedente librar el mandamiento de pago negado por el juez de primera instancia. 3.2.2.1. Innegable es que de los preceptos contenidos en los artículos 11 y 12 de la ley 446 de 1998, emana una presunción de autenticidad de los documentos privados que presenten las partes para hacerlos val[e]r como prueba. Con todo, entratándose de la prueba constitutiva de título ejecutivo, impone el artículo 11, el documento siempre debe reunir también los demás requisitos señalados en el artículo 488 del C. de P.C., esto es: obligación proveniente del deudor (demandado) a favor del acreedor (demandante) que esté revestido de plena prueba y, además, fluya de él nítidamente la calidad de expresa, clara y exigible” (Tribunal Superior de Bogotá D.C., auto del 12 de mayo de 1999. Magistrado ponente: Manuel José Pardo Caro).

⁴ Los títulos ejecutivos en nuestro medio, “se pueden clasificar con base en la naturaleza y procedencia del acto jurídico, en cuatro grupos, a saber: títulos ejecutivos judiciales; títulos ejecutivos contractuales; títulos ejecutivos de órganos administrativos, y títulos ejecutivos que emanan de actos unilaterales del deudor” (Mora G., Nelson. Procesos de ejecución. Editorial Temis, 1982. Pág. 66 a 73).

Esta postura interpretativa, desarrolla de mejor manera principios constitucionales tan valiosos como el de acceso a la justicia⁵, prevalencia del derecho sustancial⁶ y el de la justicia⁷, entre otros.

No se comparte la posición de ciertos jueces que, ante situaciones como la plateada, sólo se limitan a verificar si el documento es un título valor y, si no lo es, sencillamente niegan el mandamiento de pago, sin analizar si aquél presta mérito ejecutivo, con el argumento de que al hacerlo, se vulneraría el derecho de defensa del demandado, quien en esas condiciones, se estaría defendiendo frente al documento como si se tratara de una ejecución con base en un título valor, cuando el juez lo tomó como uno que simplemente presta mérito ejecutivo. Ello no sucede, si el Juez, de entrada, en el correspondiente auto, lo descalifica como título valor, pero libra ejecución por considerar que se trata de un documento que presta mérito ejecutivo⁸.

En consecuencia, el Juzgado

R E S U E L V E:

PRIMERO: Ordenar a **Diana Patricia Atehortúa Peñate** que cumpla la obligación de pagar a **Sierra Alliance S.A.S.**, las siguientes sumas:

⁵ El no librar el correspondiente mandamiento de pago, en situaciones como la presente, impide, sin lugar a dudas, que el ciudadano, pueda acceder al aparato jurisdiccional del Estado.

⁶ No puede desconocerse un derecho cierto, como el contenido en un documento en el cual constan obligaciones a cargo del demandado, recurriendo a formalismo que, en el fondo, lo que hacen es desnaturalizar el derecho mismo.

⁷ El preámbulo de nuestra Carta Política consagra la Justicia como valor y fin. Luego, no puede de entrada desconocerse un derecho cierto de la parte, sin cometer una injusticia.

⁸ Ante interpretaciones divergentes de una norma jurídica, se debe “...*(i) analizar cuál de las dos opciones hermenéuticas amenaza o vulnera en menor cantidad y en menor grado derechos fundamentales y (ii) de qué manera la afectación de la interpretación que es derrotada es razonable en tanto ello permite la mayor realización de la interpretación que es constitucionalmente más adecuada*” (aclaración de voto del Dr. Rodrigo Uprimny Yepes, a la sentencia T-701 de 2004).

1) \$21.040.094,00, por concepto de capital, correspondiente a la fallida factura de venta Nro. 2, más los intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida, de acuerdo con la variación mensual certificada por la Superintendencia Financiera, en armonía con los límites establecidos por las normas legales, desde el 11 de febrero de 2020 hasta el pago total de la obligación.

2) \$92.947.063,00, por concepto de capital, correspondiente a la fallida factura de venta Nro.7, más los intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida, de acuerdo con la variación mensual certificada por la Superintendencia Financiera, en armonía con los límites establecidos por las normas legales, desde el 26 de abril de 2020, hasta el pago total de la obligación.


3) \$92.942.063, por concepto de capital, correspondiente a la fallida factura de venta Nro. 8, más los intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida, de acuerdo con la variación mensual certificada por la Superintendencia Financiera, en armonía con los límites establecidos por las normas legales, desde el 1° de mayo de 2020, hasta el pago total de la obligación.

SEGUNDO: Dar a la demanda el trámite del proceso ejecutivo previsto en el C. G. del P., por lo cual, el demandado dispone del término de cinco (5) días para pagar (art. 431), de tres (3) para formular excepciones previas (art. 442, regla 3ª) o para discutir los requisitos formales del título ejecutivo, lo que debe hacer mediante reposición del mandamiento de pago (art. 430, inc. 2º) y de diez (10) para proponer excepciones de fondo (art. 442, regla 1º) o para tachar de falso el título ejecutivo⁹, lo que debe hacerse como excepción (art. 270, parte final del inc. 5º).

⁹ En este evento, y mientras estén vigentes las normas que restringen el acceso a las instalaciones del juzgado, debido a la pandemia del Covid 19, el demandado podrá solicitar que se le permita el examen físico de los títulos ejecutivos.

Para la notificación de este auto al demandado, la parte demandante puede recurrir a lo dispuesto en el artículo 8° del Decreto Extraordinario 806 de 2020. Si se acude a la notificación electrónica, previamente deberá cumplir con los requisitos de que trata el inciso 2° de dicha norma, advirtiéndose que la notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y que los términos empezarán a correrle a partir del día siguiente al de la notificación; si se utiliza la notificación por medio de una empresa postal, deberá efectuarse como lo manda el art. 292 del C.G. del P., indicándosele *“que la notificación se entenderá surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino”*.

NOTIFÍQUESE

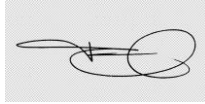


GERMÁN ALONSO FLÓREZ HINCAPIÉ
JUEZ

CERTIFICADO

Que la anterior providencia fue notificada
en estado No. 071, fijado hoy en la Secretaría
del Juzgado a las 8 a.m.

Envigado, octubre 01 de 2020



Tatiana Corrales Ramírez
Secretaria